



Nº EXPEDIENTE: 001-014750

FECHA: 10 de mayo de 2017

NOMBRE: [REDACTED]

NIF: [REDACTED]

CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]

Madrid, 5 de junio de 2017

1º. Con fecha 10 de mayo de 2017 tuvo entrada en este Ministerio una solicitud de acceso a la información pública por parte de [REDACTED] al amparo de la *Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno* (en adelante «Ley 19/2013»), solicitando «Tarifas generales que cada año han presentado en el Ministerio de Cultura las siguientes entidades de gestión: SGAE, AGEDI, AIE. Necesitaría las tarifas desde el año 1990 o en su defecto desde el año más antiguo disponible [...]», solicitud que quedó registrada con el número de expediente 001-014750.

2º. Con fecha 18 de mayo de 2017 dicha solicitud se recibió formalmente en la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 para su resolución.

3º. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General estima procedente conceder el acceso a la información a se refiere la solicitud consistente en tarifas notificadas por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual Sociedad General de Autores y Editores («SGAE»), Artistas Intérpretes Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España («AIE») y Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales («AGEDI») que se encuentran depositadas en este Centro directivo. No obstante y considerando que:

- a) Desde la aprobación de la *Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual*, el establecimiento de las tarifas generales para la determinación de la remuneración exigida por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual ha sido conferido en exclusiva a dichas entidades de gestión, sin que, por tanto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte haya intervenido ni en su fijación, ni en una ulterior aprobación de las mismas. Sin perjuicio de ello, se recuerda que, desde la entrada en vigor, en fecha 1 de enero de 2015, de las modificaciones introducidas en el *texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril* (en adelante, «TRLPI») por la *Ley 21/2014, de 4 de noviembre*, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano colegiado formado por expertos independientes, tiene reconocidas funciones de determinación y control de las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones, velando porque aquéllas sean equitativas y no discriminatorias, para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación, en su determinación, de los criterios mínimos previstos en el artículo 157.1.b) del TRLPI.
- b) Tanto el antiguo artículo 159.3 del TRLPI, declarado nulo por la STC 196/1997, de 13 de noviembre, como el vigente artículo 157.1.j) (en la redacción dada por la *Ley 21/2014, de 4 de noviembre*, en vigor desde el 1 de enero de 2015), se refieren a la obligación de las entidades de gestión de notificar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sus tarifas generales y sus modificaciones, añadiéndose en la nueva regulación de esta obligación la de



notificar los principios, criterios y metodología utilizados para su cálculo y una memoria económica justificativa (documento este señalado en la *Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual*).

- c) Las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual mencionadas en su solicitud, junto al resto de las entidades de gestión, han sido digitalizadas y difundidas por petición de este Departamento, en la web de este Ministerio desde el año 2006.

El acceso a la información deberá tener lugar, para las tarifas notificadas, de la siguiente forma:

- Hasta el día 31 de diciembre de 2005, mediante acceso directo a las tarifas generales, dado que se encuentran depositadas exclusivamente en formato papel, y el extenso volumen y su formato de edición dificultan e impiden su acceso electrónico, por lo que el acceso a las mismas se realizará en las dependencias de la Subdirección General de Propiedad Intelectual, unidad adscrita a la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, sita en la Plaza del Rey nº 1, 1ª planta, de la ciudad de Madrid, informándole que la expedición de copias de las tarifas generales por dicha Unidad dará lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la *Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos*.
- Desde el 1 de enero de 2006 a la actualidad, en soporte digital, pues su volumen de más de 120 megabytes impide su remisión por vía electrónica, para lo que se requiere que el ciudadano Eder Alonso Iglesias comunique una dirección postal a los efectos de su envío.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20.2 y 22.1 de la Ley 19/2013, esta Dirección General resuelve conceder el acceso en las modalidades especificadas en el punto anterior a la información pública a la que se refiere la solicitud registrada con el número 001-014750, indicándose que para el acceso directo a las citadas tarifas en formato papel se ruega comunicar su intención de acceder a la información con una antelación mínima de cinco días a fin de permitir a la Unidad competente, la Subdirección General de Propiedad Intelectual (teléfono 917017267, [propiedad.intelectual@mecd.es](mailto:propiedad.intelectual@mecd.es)), darle la adecuada atención.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (*Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas*, y *Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa*), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.



EL DIRECTOR GENERAL,

